

En esta edición

No obstante la expansión del sistema multilateral del comercio después de la Ronda Uruguay, son varias las áreas que siguen por fuera de la órbita de la OMC. Algunas para bien, como las especies de flora y fauna en peligro o los residuos peligrosos. Otras, con consecuencias que vale la pena explorar como las armas. Pasamos revista a este controvertido tema. Ver páginas..... 1 y 3.

El 2000 puede considerarse el año en el que la OMC se dedicó a sanar las heridas de Seattle. Un delicado trabajo de reconstrucción de confianza y algunos avances formales (como el lanzamiento de las negociaciones de agricultura y servicios) son quizá lo más destacado. Pero en lo sustantivo, en general, se percibe que el año arrojó resultados 'modestos y magros', con lo que la agenda del 2001 se presenta cargada. Ver páginas..... 5.

Quizás lo más importante del año estuvo en el Mecanismo de Solución de Diferencias. El año terminó con un gran debate a raíz de la decisión del Órgano de Apelaciones de regular el acceso de entidades no gubernamentales al proceso en el caso del asbesto (Canadá-Francia), decisión similar a la del TLCAN en el caso Methanex. Ver páginas..... 7.

En el hemisferio, destacamos las evaluaciones ambientales que ha lanzado EE.UU. sobre varias negociaciones. Ver página9.

En materia de AMUMA, los últimos meses del 2000 vieron el éxito de las negociaciones sobre contaminantes orgánicos persistentes, y el fracaso de la CoP6 de Cambio Climático. El 2001 verá nuevos hechos importantes tanto en esta última área como en materia de bioseguridad. Ver página..... 11.

Propiedad intelectual: Brasil presenta propuesta para armonizar los ADPIC y la CDB Regionales: México pone énfasis en cooperación ambiental	6
Novedades en el MSD:	
EE.UU. no impondrá sanciones a Japón	12
Acuerdo en caso Pez Espada	12
Calendario de eventos y publicaciones	16

Comercio de armas ¿fuera de control?

El comercio de armas es uno de los pocos que están explícitamente excluidos del sistema de la OMC. El Artículo XXI del GATT establece que "no deberá interpretarse ninguna disposición del presente Acuerdo en el sentido de que (...) impida a una parte contratante la adopción de todas las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad, relativas (...) al tráfico de armas, municiones y material de guerra (...)". Más aún, según ese Artículo, los países no tienen obligación de "suministrar informaciones cuya divulgación sería, a su juicio, contraria a los intereses esenciales de su seguridad". Esta disposición general se refuerza en similares términos en el Artículo XXIII del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC.

El comercio de armas es notorio por la obscuridad que lo rodea, y caer bajo la órbita de la OMC ciertamente mejoraría esta situación. El Mecanismo de Examen de Políticas Comerciales y el Mecanismo de Solución de Diferencias serían dos instancias de transparencia en este campo. Pero integrar el sistema pondría a las armas en una lógica de liberalización, cuando pareciera que estos bienes, como las especies de flora y fauna en peligro de extinción o los residuos peligrosos, no deben comerciarse libremente, sino estar sujetos a regímenes con fuertes restricciones. Entonces, ¿qué regula el comercio de armas? Existen regímenes particulares -p.ej. para las armas nucleares, las armas químicas y biológicas y las minas antipersonales. Pero el grueso del comercio no está regulado- lo que no quiere, por demás, decir que sea libre. Lo cierto es que las armas actualmente no está sujetas ni a las normas de la OMC ni a otro régimen multilateral.

En el presente artículo nos ocuparemos del comercio de armas pequeñas y livianas que si bien son una fracción relativamente pequeña del comercio de armas en general, en términos humanos tienen un impacto enorme. Hay procesos en marcha para controlar este controvertido comercio, caminos que, como dicen los autores del artículo de la página 3, son largos y prometedores. En esta nota echamos un rápido vistazo a esta situación.

Las armas pequeñas y livianas

"Los ejes centrales de la estructura de la seguridad internacional de la Guerra Fría eran la disuasión nuclear y los grandes sistemas de armamento convencional o armas de destrucción masiva (v.g. biológicas y químicas). En este contexto, el peligro de las armas individuales, categorizadas como 'pequeñas' o 'livianas', ha sido ignorado hasta ahora. La rivalidad bipolar, sin embargo, alimentó gran parte de los conflictos armados o las guerras civiles del 'Tercer Mundo' y América Latina en particular, suministrando, de forma directa o mediante terceros, armas a las facciones beligerantes", según Khatchik Der Ghougassian¹.

No obstante los procesos de pacificación que se han realizado bajo la supervisión de la ONU, gran cantidad de armas livianas, legado de la Guerra Fría, quedaron a disposición de los ex combatientes —entre soldados desmovilizados, ex guerrilleros o paramilitares- y pasaron a manos de delincuentes comunes, del

¹ Docente e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO/Argentina), especialista en temas de seguridad.

Continuación de la página 1

crimen organizado o del narcotráfico, transformándose en la mayor amenaza actual a la seguridad de los ciudadanos y poniendo en riesgo la estabilidad social, las perspectivas de desarrollo económico y, en definitiva, la democracia.

Así, el fin de la Guerra Fría destapó el dilema de la proliferación de armas cortas y livianas, ligado a los superávits en los países productores -con Estados Unidos, Rusia y China a la cabeza- y a la coincidente explosión de guerras civiles de la última década. A excepción de la Guerra del Golfo y la campaña aérea contra Yugoslavia, prácticamente todos los conflictos violentos de la nueva era se libraron con armas livianas (o convencionales -ver recuadro de la pág. 10-). Estadísticamente el arma más mortífera del planeta es el fusil automático AK-47, cuyas principales víctimas son civiles.

Un estudio de la ONU estima que actualmente circulan en el mundo unos 500 millones de armas pequeñas y livianas, la mayor parte de ellas sin ningún tipo de regulación. Se calcula que mientras la venta legal de armas pequeñas y livianas moviliza entre 7 mil y 10 mil millones de dólares por año, en el mercado negro se comercializarían entre 2 mil y 3 mil millones de dólares. A pesar de que esto es solo una parte del total del comercio mundial de armas que en 1999 alcanzó la cifra de 53.400 millones de dólares, según un informe del Instituto Internacional Estratégico de Londres (IISS), los actores involucrados en el comercio de armas livianas son los más numerosos y difíciles de controlar.

Mientras Estados Unidos es el país de origen de más de la mitad del mercado legal de armas en general, se calcula que actualmente existen cerca de 300 firmas que producen pistolas de mano legalmente y otras armas de fuego portátiles, las cuales operan en más de 50 países. Lo anterior sin incluir la venta de municiones sin las cuales estas armas serían inservibles.

"La acumulación de armas pequeñas y livianas en sí misma no causa conflictos. Su disponibilidad, no obstante, contribuye a la intensificación de los conflictos al elevar el número de víctimas y la duración de la violencia y promueve una resolución violenta de los conflictos; lo cual a su vez, genera un círculo vicioso en el que a mayor sensación de inseguridad aumenta la demanda y el uso de estas armas", advierte la ONU. No más en 1999 el gasto militar a nivel mundial alcanzó los 809.000 millones de dólares.

De la mano del aumento de la sensación de inseguridad, la venta de estas armas en forma legal se duplicó en los últimos diez años. Y "al difundirse más la tenencia de armas legales en la sociedad se refuerza la proliferación ilegal también", asegura Eugenio Zaffaroni, del Instituto Nacional contra la Discriminación de Argentina.

Ante la elocuencia de los hechos, el tema del comercio y control de armas pequeñas y livianas -ligado con fenómenos transnacionales como el tráfico de drogas y el terrorismo- ha ido ganando fuerza en la agenda internacional. Del 9 al 20 de

¿Qué pasó con la Convención Interamericana?

Los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) firmaron el 14 de noviembre de 1997 la "Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados", el primer acuerdo internacional encaminado a prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de estas armas, que podría ser utilizado como base para elaborar un protocolo en la reunión de las Naciones Unidas en julio próximo. Sin embargo, entrado el 2001, esta Convención solo ha sido ratificada por 10 países y Estados Unidos y Canadá, dos países impulsores del tema, se han negado a hacerlo.

Disposiciones claves

Licencias de exportación, importación y tránsito. Con el fin de lograr que las armas sean entregadas a usuarios legítimos, se estipula que las partes en la Convención deben establecer o mantener un sistema de licencias o de autorización eficaz para la exportación, importación y tránsito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Los Estados no pueden permitir la exportación o tránsito a través de sus fronteras de armas de fuego que no vayan acompañadas de las licencias apropiadas del país receptor y el país de tránsito.

Identificación de las armas de fuego. Para mejorar la capacidad de descubrir el origen de las armas de fuego ilícitas, las partes de la Convención están obligadas a exigir que, durante el proceso de fabricación, se imprima en las armas la marca, lugar de fabricación y número de serie. El mismo tipo de identificación se requiere en las armas de fuego importadas. Actualmente los fabricantes e importadores estadounidenses siguen esta práctica.

Clasificación como delito de la producción y venta ilícitas de armas. Se requiere que los países que no lo han hecho todavía, adopten leyes y normas que clasifiquen como delito la fabricación y tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados.

Intercambio de información. En consonancia con sus leyes nacionales, las partes intercambiarán información sobre prácticas legislativas y otras medidas nacionales para combatir el tráfico ilícito; técnicas usadas para combatir el lavado de dinero derivado de transferencias ilícitas; rutas frecuentemente utilizadas por organizaciones delincuenciales dedicadas al tráfico ilícito, medios que usan para ocultar las armas y formas de detectarlas.

Aplicación de la ley y cooperación reglamentaria. Las partes convienen en colaborar mutuamente para erradicar el tráfico de armas mediante el establecimiento de un solo punto de contacto que servirá de enlace oficial entre los Estados.

Ayuda técnica y capacitación. Los Estados acuerdan cooperar para lograr mejor capacitación en terrenos como la identificación y comprobación de origen, acopio de información, métodos de detección y protocolo de inspección en las fronteras. (*traducción no-oficial*).

julio de este año se llevará a cabo una conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio Ilegal de Armas pequeñas y livianas y sus aspectos relacionados, en miras a la cual se han realizado hasta ahora dos conferencias preparatorias en las que el tema de la participación de la sociedad civil representada en las organizaciones no gubernamentales ha sido, de nuevo, un punto de discordia.

Paralelamente en Viena, se lleva a cabo otro proceso de negociación relacionado con armas pequeñas y livianas que

Continúa en la página 10

Un largo pero prometedor camino

Por Caron O'Grady, Greg Puley y Carlos Walker Uribe *

En años recientes, la comunidad internacional ha dado pasos tentativos dirigidos hacia la imposición de restricciones humanitarias al comercio global de armas. Mientras que se ha puesto mucho énfasis en la no-proliferación de armas nucleares y en la prohibición de las minas terrestres, los armamentos convencionales, en especial las armas ligeras y pequeñas, siguen fluyendo hacia regiones en conflicto o hacia zonas críticas con respecto a los derechos humanos. En momentos en que las Naciones Unidas se preparan para llevar a cabo una histórica conferencia sobre el problema del tráfico ilícito de armas, está claro que también es urgente prestarle atención al tráfico 'legal' o promovido por los gobiernos. Ha llegado la hora de adoptar, con respecto a la transferencia de armas, una convención internacional, amplia y obligante, que las condicione a los estándares existentes de derechos humanos, al derecho internacional humanitario y a las relaciones pacíficas entre las naciones.

Sin embargo, también es claro que el proceso conducente a tal acuerdo será arduo y prolongado. Los intentos internacionales en favor del control de armas se enfrentan a enormes obstáculos económicos, políticos y estructurales. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los estados industriales más importantes han recurrido a la estrategia de financiar sus industrias nacionales de armamento mediante la venta en el extranjero de la mayor cantidad posible de armas. Los defensores de la industria argumentan que una vigorosa explotación de los mercados externos es vital para fortalecer los programas nacionales de investigación y producción, y para favorecer el empleo y la inversión en el país productor.

En 1998, se transfirieron al Tercer Mundo armas por un valor superior a los 23 mil millones de dólares. El 85 por ciento de estas exportaciones se generaron en los cinco países que ocupan asientos permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU. En los últimos diez años, el gasto militar de las naciones con menores ingresos se ha incrementado en un 19 por ciento y, en ese mismo período, los Estados Unidos han aumentado sus exportaciones del mismo tipo al Tercer Mundo en más del 50 por ciento. Según cálculos del mismo Departamento de Estado, el 84 por ciento de las transferencias de armas estadounidenses al Tercer Mundo están dirigidas a gobiernos antidemocráticos. La mayoría de los otros grandes exportadores no lo hacen mucho mejor.

El costo de esta cascada de armamentos, en términos de sufrimiento humano, es obvio. Consideremos tan solo los más de cuarenta millones de personas muertas en el mundo, durante los últimos cincuenta años, a causa de las armas de fuego. O

hagamos una lista de los violadores de los derechos humanos (incluidos Saddam Hussein, Mobutu Sese Seko y el General Suharto) que durante ese mismo período fueron armados mediante transferencias masivas de los países industrializados. O reflexionemos en torno a la ironía que encierran las recientes intervenciones de los Estados Unidos en Haití, Somalia, Irak y Panamá, en las que soldados norteamericanos tuvieron que enfrentarse a enemigos cuyas tropas utilizaban armas proporcionadas o financiadas por su propio gobierno.

Pero han recibido mucho menos atención las consecuencias indirectas del desvío masivo de recursos generado por las enormes adquisiciones de armas por parte de las naciones más pobres del mundo. Los 191 mil millones de dólares gastados cada año en las fuerzas armadas por los países en vías de desarrollo exceden los montos que esos países dedican conjuntamente a educación y salud, y equivalen a cuatro veces el total de la ayuda bilateral y multilateral para el desarrollo que esos países reciben anualmente. Por sus efectos, tanto direc-

tos como indirectos, el tráfico y la proliferación de armas convencionales representan una verdadera crisis humanitaria.

Esta frenética política de exportaciones es el producto inevitable de una industria empeñada en obtener ganancias. Con tantos recursos en juego y con tantos ávidos suplicadores, los gobiernos se protegen con frecuencia detrás del fácil argumento de que, si ellos no proveen las armas a un cliente cuestionable, otro proveedor lo hará. Mediante estas acrobacias lógicas, la

participación en un tráfico de armas divorciado de cualquier restricción moral importante es asumida como algo 'vital' para los intereses nacionales de muchas de las naciones más ricas del planeta. Y, de manera muy conveniente para los países exportadores, la miseria provocada por este comercio recae casi exclusivamente sobre los más pobres.

A pesar de todo, se han dado algunos tímidos pasos hacia la eliminación del bazar de la muerte. Entre los primeros intentos por establecer estándares para la transferencia de armas figuran la 'Declaración sobre la transferencia de armas convencionales y sobre la no-proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas' (1991), adoptada por el Grupo de los Siete, así como los 'Principios y lineamientos que rigen las transferencias de armas convencionales' (1993), de la OCDE. Aún cuando se trata de importantes avances en el desarrollo de los necesarios controles internacionales, estos mecanismos no poseen fuerza legal y, como tales, sirven más como lineamientos que como restricciones significativas para el comportamiento de los Estados en el mercado de las armas.

Continúa en la página 4

Continuación de la página 3

La misma crítica se les puede hacer a dos mecanismos recientemente establecidos con el fin de dar alguna transparencia al que ha sido hasta ahora un comercio lleno de secretos: el Acuerdo de Wassenaar y el Registro de Armas Convencionales de la Naciones Unidas. El primero fue suscrito con la intención de contribuir a la estabilidad regional y global mediante la promoción de la transparencia en la transferencia y la adquisición de armas. Los países firmantes del acuerdo se reúnen cada seis meses para intercambiar información sobre los envíos de armas convencionales a otros países. El segundo fue una de las primeras iniciativas de carácter global para tratar los problemas relacionados con la acumulación y la proliferación de armas convencionales. Ambos son regímenes voluntarios de control sobre la exportación de armas. Sin embargo, mientras que en 1998 unos 97 países -un número récord- suministraron información al registro de la ONU, muchos estados miembros de esta organización permanecen fuera del registro, lo cual atenta contra su efectividad. Del mismo modo, el acuerdo de Wassenaar no ha podido incluir a algunos grandes exportadores de armas, tales como Belarús, Brasil, China, Israel y Sudáfrica.

Códigos de Conducta

En la segunda mitad de la década de los 90, la idea de establecer códigos de conducta sobre las transferencias de armas comenzó a tomar impulso. Con dichos códigos se pretende, mediante el requerimiento de que los eventuales receptores de armas cumplan con claros estándares humanitarios, evitar cualquier transferencia de armamentos a países agresores o violadores de los derechos humanos. Aun cuando el primer proyecto de un código de esa índole presentado en uno de los grandes países exportadores de armas fue el que propusieron, en el Congreso de los Estados Unidos, los representantes Cynthia McKinney y Mark Hatfield en 1995, le correspondió a la Unión Europea ser la primera en elevar uno de ellos a la categoría de ley, cuando en mayo de 1998 fue ratificado su Código de Conducta sobre Armamentos.

El código europeo fue establecido para "fijar altos estándares comunes" que deberán ser tomados como mínimos para manejar y restringir las transferencias de armas convencionales por parte de los estados miembros de la UE. Pero, aun cuando este código ha recibido el aplauso general de todos aquellos preocupados por los devastadores efectos de las ventas irresponsables de armas, muchas personas y organizaciones han señalado varias debilidades claves. Entre estas figura el hecho de que el Código no requiere que los estados receptores demuestren que respetan plenamente el derecho internacional humanitario, tal y como lo establecen las Convenciones de Ginebra, ni exige tampoco que los estados receptores

se adhieran al Registro de Armas Convencionales de la ONU. Muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) han criticado, también, la debilidad relativa de las medidas de transparencia establecidas en el Código, así como su inoperancia en el control de la intermediación de terceras partes.

En los Estados Unidos se ha dado algún limitado progreso. Pese a que la propuesta original de McKinney y Hatfield fue derrotada en el Senado después de ser apoyada por el Congreso, una versión más débil fue aprobada después en ambas cámaras. En 1999, los principios enunciados por la congresista McKinney fueron incorporados a una iniciativa del representante Sam Gedjenson, lo que dio origen a la ley que llama al gobierno de los Estados Unidos a negociar un código internacional de conducta. La previsión operativa más importante de esta ley dispone que el Presidente debe comenzar negociaciones sobre un régimen internacional para "promover la transparencia global con respecto a la transferencia de armas, incluyendo la participación de los países en el Registro de Armas Convencionales de la ONU y la limitación, la restricción o la prohibición de transferir armas a países que no observen los valores fundamentales de libertad, paz y estabilidad internacional". Está por verse si la nueva administración estadounidense toma en serio esta responsabilidad y comienza las negociaciones sobre un código internacional.

Por suerte, se ha formado una creciente coalición internacional en favor de un código semejante. En mayo de 1997, un grupo de 19 laureados con el Premio Nobel de la Paz, dirigido por Oscar Arias, ex-Presidente de Costa Rica, lanzó su propia propuesta de un Código Internacional de Conducta. El grupo incluye a personas como el Dalai Lama y el obispo Desmond Tutu, así como a organizaciones como Amnistía Internacional y el American Friends Service Committee. El modelo de los laureados con el Premio Nobel se basa en compromisos ya adoptados por los Estados en el marco de la Carta de la ONU, así como en los principios del derecho internacional humanitario, y en la interpretación de estos, según figuran en diferentes tratados.

Las previsiones de este código son amplias y de profundo alcance. A ningún Estado se le permitirá transferir armas a un país en el que se hayan producido graves violaciones de los derechos humanos, de las leyes y costumbres de la guerra, actos de agresión internacional o de privación forzada del derecho a la autodeterminación, o supresión violenta de los derechos democráticos fundamentales. Más aún, no se podrá hacer entrega de armas que debiliten las obligaciones internacionales, tales como embargos, tratados de no-proliferación y acuerdos sobre transparencia, o vengán a obstaculizar la promoción del desarrollo humano y el desarme.

El Código Internacional de Conducta de los laureados con el Premio Nobel es, por mucho, el más incluyente y restrictivo propuesto hasta ahora y, como tal, constituye un paradigma moral con respecto al cual serán juzgadas las futuras iniciativas. A solicitud de los laureados, un grupo de ONG se ha uni-

* Caron O'Grady, abogada irlandesa, trabaja como asistente de investigación de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano (Costa Rica).

* Greg Puley, canadiense. Es co-coordinador de proyectos y director de campaña del Código Internacional de Conducta en la Fundación Arias.

* Carlos Walker Uribe, estadounidense-colombiano, oficial de programas y co-coordinador del proyecto del Código Internacional de Conducta de la misma Fundación.

2001: Una agenda apretada

El Director General de la OMC calificó el trabajo del Consejo General en relación a la aplicación de acuerdos como "pobre y magro", apreciación que podría extenderse a las demás áreas de trabajo, con algunas excepciones. Moore también calificó el año 2000 como uno de "desafío y consolidación", que es otra forma de decir que el tema central del período fue la recuperación de la OMC del golpe que sufrió en Seattle. El reporte de las últimas reuniones del año se condicen con estas calificaciones y con un continuado 'crescendo' hacia una nueva ronda multilateral.

Consejo General

Durante su última sesión formal del 2000 el Consejo General de la OMC abordó diversas cuestiones, posponiendo algunas de las más contenciosas para este año. Pasamos revista a varios temas tratados en esta reunión.

Los desafíos de la OMC. Reunido en sesión preliminar, el Consejo revisó los acontecimientos en materia de comercio internacional a partir de un informe del Director General, Mike Moore (WT/TPR/OV/6). En su presentación, Moore calificó el 2000 como un año de 'desafío y consolidación' para la OMC, y señaló cinco cuestiones claves para fortalecer el sistema de comercio:

- Avanzar sin demoras en las negociaciones sobre agricultura y servicios;
- Establecer un mecanismo para considerar las cuestiones relacionadas con la aplicación de acuerdos;
- Mantener un diálogo constructivo sobre formas de asegurar la plena participación de todos los Miembros en el trabajo de la OMC;
- Mejorar los procedimientos de consulta; y
- Dar prioridad a la integración de los países menos adelantados en el sistema para que puedan gozar de sus beneficios.

Relaciones con organizaciones intergubernamentales. El estatus de observadores en la OMC para organizaciones intergubernamentales fue motivo de controversia en la reunión. Algunos Miembros esperan que el Consejo General establezca 'criterios objetivos' para conceder dicho estatus a las organizaciones intergubernamentales en los Comités y Consejos de la OMC. El Consejo aún no logra acordar estos criterios y la cuestión se ha politizado. Algunos señalan que dicho estatus debería concederse sólo a organizaciones en las que todos los Miembros de la OMC son parte; otros sostienen que debe concedérsele a aquellas que estén abiertas a la participación de todos los Miembros de la OMC (sin que necesariamente participen). Otros buscan la inclusión de organizaciones regionales como observadoras.

La divergencia se hace particularmente evidente cuando se trata de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que muchos Miembros, en particular países en desarrollo, creen que no debe tener estatus de observadora dada la controversia que genera el tema laboral en la OMC. La Convención de Diversidad Biológica genera similares reacciones de los EE.UU., que no es parte de la misma y se opone a que tenga estatus de observadora en el Consejo del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Transparencia Interna. El Consejo General deberá abordar nuevamente este año la cuestión de la transparencia interna en la preparación y organización de Conferencias Ministeriales. La discusión en esta reunión giró en torno a una presentación del Presidente, Kare Bryn, en la que se describen los puntos de vista de los Miembros (JOB (00)/7891/Rev.1), y que recibió apoyo mayoritario de éstos.

Reaccionando a este documento, Singapur, en nombre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), señaló su preferencia por una combinación de pequeños grupos informales y reuniones abiertas, cuyos resultados sean compartidos con todos los Miembros de manera inmediata a fin de que estos puedan responder a las últimas propuestas. India, por su parte, dijo que si bien apoya un grado de flexibilidad en las Ministeriales, no se pueden agregar temas no discutidos a último momento, en una aparente alusión al intento de EE.UU. y otros en la reunión Ministerial de Seattle de crear un Grupo de Trabajo sobre Comercio y Estándares Laborales durante las negociaciones.

Revisión del ESD. También se discutió una propuesta de Japón y otros miembros (entre ellos Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela) de reformar ciertas disposiciones del Entendimiento sobre Solución de Diferencias, ESD (WT/GC/W410 y Add.1). La propuesta es establecer un nuevo Artículo 21 que clarifique la cuestión de la secuencia en relación a los Artículos 21 y 22. El Presidente señaló que no ha habido progreso en este tema. La UE indicó que no era suficiente reformar esos dos artículos, y que todo el ESD debería abrirse a discusión. EE.UU., por su parte, dijo que esta propuesta no avanza lo suficiente en la apertura de los procesos de solución de controversias a escrutinio público, ni aclara cómo se aplicaría la reforma a casos pendientes, en particular el caso del banano. Argentina y Bulgaria se opusieron a la reforma ya que aceleraría un proceso que ya encuentran suficientemente rápido.

Amicus curiae. Finalmente, Bryn informó al Consejo que con el fin de dar seguimiento a la sesión especial para tratar el tema de las presentaciones espontáneas en el Mecanismo de Solución de Diferencias (MSD), del 22 de noviembre (ver pag. 7), se había reunido con el Presidente del Órgano de Apelaciones y algunos de sus miembros para informarles de las conclusiones de esa sesión.

Aplicación de acuerdos

La reunión final del 2000 de la Sesión Especial del Consejo General sobre Aplicación de Acuerdos (15-16 de diciembre) arrojó pocos resultados sobre los reclamos de los países en desarrollo.

Continúa en la página 6

Continuación de la página 5

En lo que el Director General, Mike Moore, calificó como "resultados modestos y magros", los Miembros esencialmente reconfirmaron lo que ya habían decidido en mayo del 2000: que el Consejo continuará sus reuniones en sesión especial para discutir las preocupaciones de los países en desarrollo. Estas preocupaciones están incluidas en los párrafos 21 y 22 del Borrador del Texto Ministerial del 19 de octubre de 1999, y abarcan cuestiones como una aplicación más completa de los compromisos asumidos en materia de textiles, subsidios, anti-dumping y otras obligaciones contraídas en negociaciones previas. Poco se ha avanzado en relación a las posiciones pre-Seattle.

Brasil, Egipto y Pakistán expresaron su insatisfacción con la decisión final, que difiere la finalización del proceso para 'no más tarde que la Cuarta Sesión de la Conferencia Ministerial', estimada para finales de 2001. La decisión no abordó las cuestiones más controvertidas, como textiles y *antidumping*, en las que los países en desarrollo reclaman cambios en los acuerdos existentes para asegurar un mejor acceso para sus productos en los países desarrollados.

Propiedad intelectual

En la última reunión del Consejo del Acuerdo sobre los ADPIC celebrada del 27 de noviembre al 1 de diciembre, Brasil continuó impulsando la armonización de las disposiciones de este Acuerdo y de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB). En su presentación (IP/C/W/228) propuso reformas específicas al Artículo 27.3.b), las cuales permitirían a los Miembros establecer condiciones a la patentabilidad, incluyendo la incitación a que éstos:

- revelen la fuente del material genético;
- revelen el conocimiento tradicional relevante que se utilizó para obtener el material;
- muestren evidencia de una distribución justa y equitativa de beneficios; y
- muestren evidencia de que el solicitante de una patente tiene el consentimiento del gobierno/comunidad local de donde el material se obtuvo.

El documento de Brasil también aborda cuestiones técnicas relativas a la protección de patentes bajo el art. 27.3.b); la protección sui generis de variedades de plantas; cuestiones éticas relacionadas con la patentabilidad de formas de vida; la conservación y uso sostenible de material genético; y conceptos de conocimiento tradicional y derechos de los campesinos.

Las reacciones al documento reflejaron las que ya se habían producido frente a esfuerzos similares de India y el Grupo de países Africanos. Singapur, por ejemplo, dijo que el Acuerdo sobre los ADPIC no debe utilizarse para imponer reglas comunes a los Miembros. Si bien reconoció la necesidad de distribuir beneficios y probar la innovación, resaltó que es justo recompensar la investigación con la protección de una patente. Otros Miembros, incluyendo EE.UU. y Japón, han señalado reiteradamente que no hay conflicto entre la CDB y los ADPIC, y que no son necesarias reformas.

En cuanto a la revisión de la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC establecida por el Art. 71.1, India y Australia presentaron documentos encontrados: la primera insistiendo en que la revisión se enfoque en si los objetivos del Acuerdo se han alcanzado, y la segunda proponiendo un enfoque sobre las cuestiones de aplicación del acuerdo. La próxima reunión del Consejo del Acuerdo sobre los ADPIC está prevista para la primera semana de abril.

Agricultura

En materia de agricultura, el año cerró con una larga discusión sobre cuestiones no-comerciales. En la última sesión especial sobre agricultura llevada a cabo en noviembre pasado, los Miembros discutieron especialmente un documento presentado por la UE, otros países europeos y varios países de África, el Caribe y el Pacífico. El documento (G/AG/NG/W-36/Rev.1) incluye ensayos sobre los diferentes aspectos no comerciales.

Las 50 delegaciones que tomaron la palabra coincidieron en que todos los Miembros de la OMC tienen intereses no-comerciales legítimos que deben tomarse en cuenta en las negociaciones sobre agricultura. Estos intereses incluyen la seguridad alimentaria, el desarrollo rural, el alivio de la pobreza, la protección ambiental y otros objetivos socioeconómicos. Más allá de eso, no hubo consenso.

Donde los impulsores de la multifuncionalidad (la UE, Corea, Japón, Noruega, Suiza y las economías en transición) ven la necesidad de ampliar el alcance de la caja verde¹ para eximir un mayor número de medidas de apoyo interno de las obligaciones de reducción, los principales exportadores agrícolas enfatizan que los objetivos sociales y ambientales pueden y deben lograrse por medios distintos de los subsidios. Australia hizo una declaración particularmente sonante, alineada con la posición del Grupo Cairns: "Promover los intereses no-comerciales de un Miembro a través de medidas distorsivas del comercio es negar a otros Miembros la oportunidad de promover sus intereses no-comerciales. Dado que la mayoría de los países que promueven la importancia de las preocupaciones no comerciales son ricos, exportar esta carga a los países más pobres viola un concepto elemental de equidad y es ajeno a los objetivos del sistema multilateral de comercio". El delegado australiano invitó a los Miembros a "empezar a discutir los instrumentos de política específicos que proponen utilizar".

Muchos países en desarrollo (p.ej. los del sudeste asiático) quisieran restringir, más que ampliar, los criterios para los subsidios de caja verde de los países desarrollados y eliminar la categoría de caja azul, al tiempo que buscan mayor amplitud para subsidiar sus propios intereses no-comerciales, incluyendo la seguridad alimentaria, la capacidad productiva,

¹ Los subsidios de caja verde y azul están exentos de compromisos de reducción. La 'caja verde' incluye el apoyo interno que no es distorsivo del comercio, o sólo mínimamente distorsivo. Las medidas de 'caja azul' son las que distorsionan el comercio, pero están permitidas porque están orientadas a limitar en lugar de expandir la producción.

Fuerte controversia por acceso de ONG al MSD

Desde que el Organo de Apelaciones se pronunció en octubre de 1998 en el sentido de que los paneles de solución de diferencias pueden considerar presentaciones espontáneas provenientes de entidades no gubernamentales, se ha profundizado la división entre miembros de la OMC respecto a esa participación.

El pronunciamiento generó una gran oposición de parte de los países en desarrollo. La controversia se profundizó con la afirmación del Organo de Apelaciones (OA) en el caso del acero británico -resuelto el año pasado-, de que ese órgano tiene discreción para aceptar *amicus curiae* o presentaciones de 'amigos del tribunal'; y llegó al paroxismo luego de que el OA emitiera, el 8 de noviembre de 2000, un procedimiento para estas presentaciones a raíz de la apelación de Canadá a un panel que decidió que la prohibición de Francia de importar asbesto *chrysotile* se justificaba por razones de salud pública. La emisión de estas reglas de procedimiento motivó que Egipto y otros países en desarrollo llamaran a una sesión especial del Consejo General para discutir lo que consideran una 'usurpación' por parte del OA de los derechos de los Miembros.

La decisión de hacer públicos estos criterios se hizo, según el comunicado del OA adjunto a la decisión, 'en interés de la equidad y el orden de procedimiento en el desarrollo de esta apelación' (WT/DS135/9). Según fuentes diplomáticas, el OA decidió establecer este 'procedimiento adicional' porque ya había recibido 13 presentaciones espontáneas -y espera recibir más- en un caso que ha suscitado gran interés por parte de organizaciones públicas. Organizaciones de la sociedad civil han aplaudido este procedimiento, al que llamaron un 'raro momento de claridad' y un reconocimiento del 'valor de nuestras contribuciones al proceso de toma de decisiones en la OMC'. Si bien criticaron los estrechos tiempos establecidos para el procedimiento, unas 20 organizaciones no gubernamentales utilizaron la oportunidad para requerir el derecho de presentar argumentos en la apelación, la mayoría concentrándose en la decisión del panel de que la toxicidad no es un criterio relevante para discriminar entre 'productos iguales' según el Artículo III.4 del GATT.

Requisitos exigentes. El procedimiento en cuestión estableció criterios rigurosos para solicitar el 'permiso de presentar' un *amicus curiae* ante el OA, solo para el caso del asbesto. El 16 de noviembre vencía el plazo para que 'cualquier persona, sea natural o jurídica, aparte de las partes o terceras partes en esta disputa' sometiera una solicitud de tres páginas para presentar un *amicus curiae*. Esta aplicación debía, entre otras cosas, especificar 'la naturaleza del interés' que el solicitante tenía en la apelación, identificar las cuestiones de derecho específicas del informe del panel que el solicitante pretendía abordar en su presentación, e indicar de qué manera éste contribuiría a la solución de esta

disputa sin que fuere repetitiva de lo que ya hubiese presentado una parte o tercera parte.

Aquellos autorizados debían hacer sus presentaciones hasta el 27 de noviembre. Los criterios incluyeron una extensión máxima de 20 páginas y un requerimiento sustantivo de 'hacer una declaración precisa, estrictamente limitada a los argumentos legales, en apoyo de la posición legal del solicitante, sobre las cuestiones de derecho o interpretación legal en el informe del panel'. El OA especificó que el derecho de hacer una presentación escrita no implicaba que estos argumentos serían abordados en su informe.

Denegaron todas las solicitudes. Las 13 presentaciones recibidas antes de la adopción del procedimiento fueron devueltas a sus remitentes, con indicación de las nuevas reglas. Y desde entonces el OA ha guardado silencio. Ante la indignación expresada por muchos miembros (para quienes el tratamiento de los *amicus curiae* es uno de los temas de transparencia externa más controvertidos), los miembros del OA y la Secretaría de la OMC han optado por no responder más preguntas. No obstante, según la Secretaría para la Prohibición Internacional del Asbesto (International Ban Asbestos Secretariat - IBAS), 17 organizaciones llegaron a hacer uso del procedimiento para solicitar permisos de hacer presentaciones por escrito al OA. Si bien diez de estos permanecen desconocidos, IBAS sostiene que todas las solicitudes fueron denegadas.

Entre las solicitudes denegadas estaba una realizada en conjunto por seis organizaciones no gubernamentales. Sus auspiciantes incluyen a IBAS (que coordina una red de víctimas del asbesto, trabajadores y sindicatos, organizaciones ambientalistas, agencias gubernamentales y entidades de investigación médica) así como el Ban Asbestos Network, Greenpeace International, World Wide Fund for Nature International, Foundation for International Environmental Law and Development y Center for International Environmental Law.

La respuesta del OA se limita a decir que 'su solicitud (...) ha sido denegada por no llenar los requerimientos establecidos en el párrafo 3 del procedimiento adicional'. La coalición de ONG, por su parte, emitió una declaración condenatoria de la 'falta de equidad en el procedimiento' del OA por no clarificar cuáles de los siete requisitos del procedimiento no fueron satisfechos. "Obviamente no han aprendido la lección de Seattle", dijo Rémi Parmentier de Greenpeace International. "Una vez más, la OMC ha desechado de manera arbitraria los insumos de la sociedad civil, alimentando la preocupación sobre el secretismo con el que se toman decisiones que impactan la vida humana y el medio ambiente".

Preocupaciones de los Miembros. Muchos miembros, tanto países en desarrollo como desarrollados, creen que los pronunciamientos del OA sobre la admisibilidad de las presentaciones no-gubernamentales constituyen una forma ilegal de legislar más que una forma legítima de interpretar el ESD. En la sesión del Consejo General del 22 de noviem-

bre, convocada para considerar la legitimidad del nuevo procedimiento, varios miembros reiteraron su visión de que el OA había excedido sus competencias, ya que sólo los Miembros pueden cambiar las reglas de solución de diferencias, y en tal caso sólo por consenso. Señalaron que, según el Art. 17.9 del ESD, los procedimientos de trabajo del OA, como los lineamientos en cuestión, deben ser elaborados por 'el Organo de Apelación, en consulta con el Presidente del OSD y con el Director General (...) y dará traslado de ellos a los Miembros para su información'.

Más allá de las críticas al procedimiento, los Miembros volvieron a manifestar sus preocupaciones constantes respecto a los *amicus curiae*. La más seria de estas se relaciona con los derechos de los Miembros y la naturaleza gubernamental de la OMC. Sólo las partes y las terceras partes pueden hacer presentaciones a los paneles de solución de diferencias. Para ser una tercera parte, un país debe, al inicio de un proceso de solución de diferencias, demostrar que tiene un interés comercial sustantivo en la disputa, y ningún Miembro puede sumarse en la etapa de apelación como tercera parte. De esa forma, el derecho de 'cualquier persona natural o jurídica' a hacer una presentación ante el OA confiere a 'extraños' más acceso al sistema de justicia de la OMC que a los Miembros que no están directamente involucrados en la disputa.

Incluso Canadá, usualmente abierto a una mayor transparencia externa de la OMC, dijo que los Miembros y no el sistema de solución de diferencias deben decidir cómo deben considerarse los *amicus curiae* en el futuro.

Entre los más de cuarenta Miembros de la OMC que hablaron en el Consejo General, India condenó la decisión de emitir el procedimiento y se refirió a ella como un desconocimiento "del abrumador sentimiento de los Miembros contra la aceptación de *amicus curiae* no solicitados". También criticó al OA por colocar el procedimiento en el sitio *web* de la OMC como una virtual invitación a que 'cientos de ONG' hagan presentaciones.

Sólo EE.UU. apoyó plenamente la decisión del OA. La embajadora Rita Hayes señaló que el OA "hizo lo único que podía hacer" dada la cantidad de personas que habían hecho presentaciones o expresado su intención de hacerlo. Nueva Zelandia y Suiza fueron los únicos otros Miembros que expresaron un cauto apoyo a la iniciativa del OA.

En la práctica, sólo una presentación no-gubernamental ha sido tomada en consideración por un panel: la de los Pescadores y Procesadores Interesados del Sur de Australia, en el caso del salmón australiano. Otra presentación fue aceptada, pero no considerada, en una disputa sobre anti-dumping sobre textiles que la India ganó a la UE. *Amicus curiae* que integraban presentaciones de gobiernos fueron consideradas por paneles en la disputa entre EE.UU. y la UE sobre las leyes de derechos de autor en los EE.UU. y en el caso camarón-tortugas. Presentaciones independientes en la apelación

sobre el acero británico (realizadas por asociaciones industriales) y la disputa del asbesto fueron rechazadas. En ningún caso los paneles dieron detalles sobre por qué habían aceptado o rechazado presentaciones no solicitadas.

Oportunidad perdida. En un irónico giro de eventos, los Miembros que con más vehemencia condenaron al OA por tomar una decisión que solo los Miembros pueden tomar, son los mismos que pusieron mayor énfasis en la decisión de terminar en 1999 la revisión de las reglas de solución de diferencias sin hacer cambios.

La revisión del ESD era una oportunidad perfecta para que los Miembros clarificaran las reglas de procedimiento, incluyendo el estatus de los *amicus curiae*. En aquel momento ya se había instalado la controversia en torno a la decisión de 1998 de que los paneles pueden decidir si aceptan o no información no solicitada de fuentes no gubernamentales. La cuestión fue ampliamente debatida con EE.UU. y, en menor medida, con la UE, que se pronunciaron a favor de incluir una disposición explícita sobre el derecho de presentar *amicus curiae*. En contraste, la mayoría de los países en desarrollo, liderados por India y Pakistán, buscaban una clarificación que estableciera que sólo las presentaciones gubernamentales pueden considerarse en los procedimientos de solución de diferencias. Al dejar que la revisión se esfumara sin conclusiones, los Miembros dejaron en manos de los paneles y el OA la interpretación de las disposiciones del ESD.

Corresponde ahora al Presidente del Consejo General, Kare Bryn, quien ha extendido una dura nota al OA incitándolo a ejercitar 'cautela extrema' en este tema, tratar de construir un consenso sobre lo que es aceptable en relación a los *amicus curiae*.

BRASIL vs. UE por SGP

Después de que Brasil solicitara consultas con la UE en relación con el acceso al mercado de café soluble bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de esta última, el pasado 23 de enero en una reunión entre las partes, la UE propuso cuotas libres de aranceles para el café soluble brasileño.

El tratamiento preferencial para las exportaciones de café soluble de Brasil fue eliminado el primero de enero de 1999 bajo un mecanismo de 'graduación', que según Brasil 'reduce o elimina progresiva y selectivamente las preferencias para productos específicos y/o países beneficiarios en el esquema de SGP'. Al mismo tiempo, los países andinos y centroamericanos que llevan adelante campañas para combatir el tráfico ilegal de drogas continúan beneficiándose del acceso libre de aranceles a los mercados de la UE bajo el SGP. Brasil alega que estas medidas afectan negativamente sus exportaciones de café soluble a la UE y son inconsistentes con las disposiciones de la Cláusula de Habilitación y el trato de nación más favorecida del Artículo 1 del GATT.

Movida agenda ambiental-comercial en América del Norte

Aparte de las negociaciones entre Chile y EE.UU. y la posible aceleración del ALCA, cabe destacar durante el período reportado que EE.UU. ha lanzado evaluaciones ambientales de diversos acuerdos comerciales.

EE.UU. publica lineamientos para evaluaciones ambientales de acuerdos comerciales

La oficina del Representante Comercial de los EE.UU. y el Consejo de Calidad Ambiental de ese país, publicaron en diciembre los lineamientos finales para la aplicación de la Orden Ejecutiva 13141 sobre "Evaluaciones Ambientales de los Acuerdos Comerciales" emitido por Bill Clinton en noviembre de 1999. El decreto obliga a EE.UU. a evaluar y considerar los impactos ambientales de los acuerdos comerciales futuros.

Si bien la mayoría de los grupos ambientales han aplaudido los lineamientos, los grupos empresariales aún se resisten a la inclusión de estándares laborales y ambientales en los acuerdos comerciales. No está claro qué ocurrirá con estos lineamientos bajo la administración de George Bush, pero la saliente negociadora comercial de este país, Charlene Barshefsky, ha señalado reiteradamente que no será posible para la nueva administración eliminar el tema ambiental y laboral de las negociaciones comerciales: "La realidad política es que ningún acuerdo de libre comercio será aprobado sin incorporar algo sobre trabajo y medio ambiente" dijo Barshefsky a la prensa recientemente.

Los lineamientos finales requieren la 'integración' de consideraciones ambientales en el desarrollo de los objetivos comerciales de EE.UU. y proveen un marco para la elaboración de Evaluaciones Ambientales. Estas evaluaciones son informes escritos diseñados para analizar los impactos ambientales de los principales acuerdos comerciales, y serán requeridas para rondas multilaterales y acuerdos plurilaterales o bilaterales, así como disposiciones de importancia en el sector de recursos naturales.

En la actualidad se están realizando evaluaciones sobre los acuerdos entre EE.UU. y Jordania, Chile, Singapur, el Área de Libre Comercio de las Américas y las negociaciones sobre agricultura y servicios en la OMC. "La clave es la participación del público para asegurar que las cuestiones ambientales pertinentes son identificadas y exploradas a medida que las negociaciones avanzan" dijo Barshefsky. Para mejorar la participación pública, el procedimiento prevé comentarios y consultas **abiertas** sobre futuros acuerdos comerciales.

México pone énfasis en cooperación ambiental

La Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN), misma que se ha constituido en un modelo de cooperación ambiental en el marco de acuerdos de liberalización comercial, se ha enfrentado en los últimos tiempos a

una situación de incertidumbre dado que los gobiernos miembros no le han brindado el apoyo necesario para cumplir cabalmente con su mandato.

Por lo anterior, la postura expresada públicamente como uno de los primeros actos del gobierno entrante de México respecto a la Comisión representa un nuevo aliento de optimismo para la misma, y, seguramente, para otros procesos en los que se busque compatibilizar la liberalización comercial con la protección ambiental en el Hemisferio.

En la actualidad se están realizando evaluaciones sobre los acuerdos entre EE.UU. y Jordania, Chile, Singapur, el Área de Libre Comercio de las Américas y las negociaciones sobre agricultura y servicios en la OMC.

En relación a lo anterior resulta relevante mencionar que el pasado 5 de diciembre, el nuevo Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Victor Lichtinger, hizo públicos los nuevos lineamientos del país en materia de política ambiental internacional. Entre otros aspectos, destacó que la administración del Presidente Vicente Fox alentará

la participación efectiva de la sociedad para resolver los problemas ambientales que padece México. En este mismo sentido, pidió a sus contrapartes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre otras cosas, que se respeten los espacios de participación pública contemplados en el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), buscando con ello garantizar a los ciudadanos y a las ONG de los tres países el derecho a presentar peticiones en contra de cualquiera de los tres gobiernos por supuestas faltas de aplicación efectiva de su legislación ambiental.

Asimismo, el Secretario Lichtinger manifestó su desacuerdo en relación al intento por parte de los gobiernos durante el año 2000, de imponer requerimientos adicionales al petitorio para presentar los casos, así como al Secretariado para recibir y dar curso a las peticiones ciudadanas. Adicionalmente, propuso el fortalecimiento del Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) del ACAAN, tras aceptar que este órgano ha jugado un papel de muy bajo perfil e incluso ha sido marginado de muchas decisiones tomadas en el seno de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA). Finalmente, Lichtinger destacó el apoyo a acciones de cooperación en todo el continente, vinculando dos elementos: el comercio y el medio ambiente. En este sentido, se expresó una clara intención de promover la evaluación del papel que debe jugar el medio ambiente en el marco de la integración comercial del Hemisferio Americano.

Ante la grata sorpresa, habrá que estar al tanto de cómo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México logra negociar una postura en este sentido con la Secretaria

Continúa en la página 10

Continuación de la página 9

ría de Economía, a nivel interno, esperando que ésta se refleje en el proceso de negociaciones tendientes a la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas.

Preparado por Ana Karina González y Gustavo Alanís Ortega - Centro Mexicano de Derecho Ambiental – CEMDA.

Panel del TLCAN acepta *Amicus Curiae* en caso Methanex

Ambientalistas de América del Norte celebran la decisión preliminar del pasado 16 de enero de un tribunal del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el caso Methanex-EE.UU., relacionado con las disposiciones del Tratado relativas a inversiones (Capítulo 11), en el que establece que el tribunal tiene la potestad de aceptar presentaciones espontáneas de terceros (*amicus curiae*) en este caso. La decisión es una fuerte señal a organizaciones no gubernamentales de que el tribunal está dispuesto a oír sus argumentos en la disputa.

La disputa gira en torno a una prohibición del Estado de California sobre un aditivo para gasolina (MTBE), sospechado de ser cancerígeno, manufacturado por la empresa canadiense Methanex Corporation. En respuesta a la prohibición, Methanex planteó un pleito contra el gobierno de EE.UU. ante el tribunal del TLCAN, argumentando que según el Capítulo 11 del Tratado la prohibición constituye una 'expropiación de sus intereses comerciales'. Methanex reclama una compensación de US\$970 millones por eventual lucro cesante. La prohibición entraría en vigor en el 2002.

La decisión del tribunal fue motivada por una presentación de la ONG canadiense International Institute for Sustainable Development (IISD), que presentó un documento al tribunal exponiendo argumentos que no serían oídos de no permitirse la participación pública en el proceso. En sustancia, el IISD sostiene que el caso representa una oportunidad de que el tribunal considere en pie de igualdad las disposiciones económicas, ambientales y de desarrollo sostenible que contiene el Tratado. Puede encontrarse más información en www.iisd.org/trade/investment_regime.htm.

Comentario / Continuación de la página 2

consiste en las elaboración de un Protocolo sobre la fabricación y el tráfico ilegales de armas de fuego, sus partes, componentes y munición [A/AC.254/4/Add.2/Rev.5], que complementará la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado.

Aumenta la urgencia

Desde la firma del tratado de minas en 1997, mucha de la atención internacional se ha centrado en aprovechar el impulso generado por el 'Proceso de Ottawa', a través de un movimiento internacional concertado para combatir la proliferación de armas livianas. El problema que presenta la proliferación de armas livianas es mucho más complejo que el que

se dio con las minas antipersonales. Afecta a más regiones del mundo y se sostiene por intereses políticos y económicos. Además, mientras que había consenso internacional en cuanto a que el uso de las minas era ilegítimo, y que por lo tanto debía buscarse una prohibición categórica, no existe tal acuerdo con el uso de armamento liviano. Cada Estado lo utiliza para su defensa externa y su labor de policía.

"Se calcula que las armas pequeñas y el armamento liviano suman entre el ochenta y el noventa por ciento de las muertes en conflictos violentos hoy en día, gran parte de ellos civiles. Por eso, controlar el comercio de armas livianas debe ser una parte indispensable de cualquier esfuerzo concertado para avanzar en las metas de desarrollo humano alrededor del mundo" puntualiza Greg Puley, de la Fundación Arias.

¿Qué son armas 'pequeñas' y 'livianas'?

Según la categorización que hace la ONU, las armas pequeñas son armas diseñadas para uso personal mientras las armas livianas están diseñadas para ser utilizadas por un grupo de personas (p.j. un ejército). Entre las primeras se encuentran: revólveres, pistolas auto-recargables, rifles, rifles de asalto, sub-ametralladoras y ametralladoras livianas. Entre las segundas figuran las ametralladoras pesadas, algunos tipos de lanza-granadas, armas portátiles anti-aéreas y anti-tanques y lanzadores portátiles de misiles antiaéreos.

La munición y los explosivos que forman parte integral de estas armas incluyen los cartuchos para armas pequeñas y proyectiles y misiles en el caso de las armas livianas. Granadas manuales anti-personales y anti-tanques, minas terrestres, explosivos y contenedores móviles con misiles o proyectiles para sistemas de acción unificada de lucha anti-aérea y anti-tanques.

Comentario / Continuación de la página 4

do con varios expertos en derecho internacional para preparar un texto basado en los principios consagrados en la propuesta de los premiados.

Una posible ruta política para este instrumento es su presentación ante la Conferencia sobre Desarme de la Asamblea General de las Naciones Unidas en julio de este año. Otra, consiste en evitar, mediante la negociación de un tratado independiente, las dificultades políticas asociadas al sistema de la ONU. Este último modelo, conocido como el 'Proceso de Ottawa', resultó exitoso en la negociación del Tratado sobre las Minas Terrestres, y podría ser nuevamente efectivo en la búsqueda de un tratado más amplio sobre el tráfico de armas.

Cualquiera que sea la alternativa escogida, es claro que los laureados proponentes, y las ONG que los apoyan, tienen un largo camino por delante antes de lograr que se establezcan los controles, fuertes y coordinados, que vengan a poner fin al bazar mundial de la muerte. Es, sin embargo, un camino que vale la pena recorrer. "Controlar el comercio de armas es un imperativo humanitario", ha dicho Oscar Arias. El reto al que se enfrentan el doctor Arias y sus compañeros es el de convencer a la comunidad internacional de que también es un imperativo político.

Continuación de la página 6

el empleo para la población rural pobre y la regulación contra importaciones subsidiadas.

También se discutió un documento preparado por los países del Mercosur, Bolivia, Chile y Costa Rica sobre los efectos de los subsidios a la exportación en las economías de los países en desarrollo importadores netos de alimentos (G/AG/NG/W/38). El documento sostiene que estos subsidios aumentan la dependencia, provocan problemas de balanza de pagos y deuda, y dificultan el desarrollo de la agricultura interna. El documento fue apoyado por varios países (incluyendo a Colombia, México, India y la mayoría del Grupo de Cairns), en tanto que la UE y Suiza calificaron sus conclusiones de 'simplistas'.

Trato especial y diferenciado. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) presentó una propuesta de negociación sobre Trato Especial y Diferenciado para Países en Desarrollo en el Comercio Agrícola (G/AG/NG/W/55), en el que sostiene que plazos más largos para liberalizar no son suficientes. "La naturaleza, profundidad y substancia de los compromisos también deben ser diferentes"; por ejemplo, los países desarrollados deberían eliminar inmediatamente todas las formas de subsidios a las exportaciones, en tanto que los países en desarrollo deben tener la facultad de continuar utilizando la flexibilidad existente a este respecto, dice ASEAN. La propuesta fue recibida con entusiasmo por India y otros países en desarrollo, pero Suiza advirtió que no deben alimentarse expectativas que no podrán cumplirse.

Acceso a mercados. Por su parte, el Grupo de Cairns (sin el apoyo de Canadá y Fiji) (G/AG/NG/W/54) propone un "adelanto" a las negociaciones consistente en bruscas reducciones de aranceles y una substancial expansión de los volúmenes de cuotas arancelarias en el primer año de aplicación del nuevo Acuerdo. Para enfrentar las preocupaciones sobre acceso a mercados, el Grupo Cairns propone disposiciones de trato especial y diferenciado, tales como rebajas arancelarias más rápidas y pronunciadas para todos los productos agrícolas de países en desarrollo, una administración más favorable de cuotas arancelarias y el mantenimiento de la cláusula de salvaguardia para países en desarrollo. La propuesta fue apoyada por Ecuador, EE.UU. Turquía, Pakistán e India, y rechazada por la UE, Noruega, Suiza y Japón.

Otras propuestas presentadas vinieron de las economías en transición sobre apoyo interno y acceso a mercados (G/AG/NG/W56 y W57) y de EE.UU. sobre reformas a las cuotas arancelarias (G/AG/NG/W58).

Del 5 al 7 de febrero fue convocada otra sesión especial del comité que discutirá, entre otras, la propuesta de la India de crear una 'caja de seguridad alimentaria', una idea similar a la de 'la caja de desarrollo agrícola' que propusieron los países en desarrollo antes de la Conferencia de Seattle.

UE adopta posición negociadora común. En un evento relacionado, los ministros de agricultura de la UE aprobaron el 21 de noviembre una posición negociadora 'sin sorpresas' para las negociaciones en la OMC.

La propuesta reitera los principales elementos de presentaciones anteriores de la UE, incluyendo la voluntad de negociar reducciones a los apoyos internos siempre que se mantengan las cajas verde y azul; el condicionamiento de la reducción en subsidios a la exportación a la negociación de otras formas de apoyos a las exportaciones (como los créditos, empresas comerciales estatales y asistencia alimentaria); y, una aproximación a las negociaciones de acceso a mercados a través de la fórmula de la Ronda Uruguay de reducción de aranceles. La UE también buscará mantener la cláusula especial de salvaguardia y la cláusula de paz (que expira en el 2003).

La posición dedica un amplio espacio a la cuestión de la multifuncionalidad (que según la misma incluye la contribución de la agricultura al "desarrollo sostenible, la protección del ambiente, la vitalidad sostenida de las áreas rurales y la reducción de la pobreza"), y confirma el apoyo de los ministros al "bienestar de los animales", -la única cuestión no-comercial que la UE ha desarrollado en detalle hasta ahora (G/AG/NG/W/19)-. El bloque europeo también se comprometió a seguir promoviendo la aceptación del principio precautorio para garantizar la seguridad alimentaria. Para ello, propuso que los Miembros de la OMC clarifiquen su aplicación.

Servicios

El 5 y 6 de diciembre se llevó a cabo la última reunión del Consejo de Comercio de Servicios convocada a Sesión Especial para negociar una mayor liberalización de este sector. Durante esta fase de las negociaciones, los Miembros han presentado propuestas con los elementos para elaborar los lineamientos y la estructura de la segunda fase de negociaciones, prevista para marzo. Un borrador de texto con las propuestas formuladas verbalmente y por escrito, ya fue distribuido e iba a ser discutido el 7 de febrero en la reunión del Consejo.

La propuesta de un grupo de países en desarrollo (incluyendo Argentina, Brasil, Colombia, México, India, Indonesia, Malasia, Pakistán y Filipinas) fue considerada una muestra importante de la voluntad de este grupo de avanzar en las negociaciones. En ella, estos países manifiestan los principios que deberían guiar las negociaciones así como los objetivos de las mismas: lograr un nivel progresivamente alto de liberalización en el comercio de servicios, respetando la arquitectura del Acuerdo existente; equilibrar los derechos y obligaciones de los Miembros y aumentar la participación de los países en desarrollo en el comercio de servicios.

La discusión de la última reunión también se concentró en tres propuestas adicionales, una de la UE sobre el enfoque general

“Promover los intereses no-comerciales de un Miembro a través de medidas distorsivas del comercio es negar a otros Miembros la oportunidad de promover sus intereses no-comerciales....”

Continúa en la página 12

Continuación de la página 11

de las negociaciones; una de la India sobre el movimiento de personas naturales y, una de Australia sobre liberalización de servicios de telecomunicaciones. La presentación de la UE señala que los objetivos de las negociaciones deben ser consistentes y complementarios con los objetivos del desarrollo sostenible. En particular, enfatiza que la política comercial, ambiental, social y de cooperación para el desarrollo deben apoyarse en favor del desarrollo sostenible; y establece que los Miembros deben mantener el derecho de proteger objetivos de política nacional, incluyendo la introducción de nuevas regulaciones.

Inversiones

Tampoco se logró acuerdo sobre la extensión de la fecha límite para la aplicación del Acuerdo sobre Medidas en Materia de Inversiones relacionadas con el Comercio, la cual ha sido solicitada por nueve países (Argentina, Chile, Colombia, México, Malasia, Pakistán, Filipinas, Rumania y Tailandia). El principal obstáculo a este acuerdo es la posición de EE.UU., que se resiste a una extensión generalizada e insiste en negociar las concesiones de manera bilateral. Pero también se especula que el lento progreso en este tema se debería a una estrategia de negociación por parte de varias delegaciones, que se resisten a avanzar en este tema fuera del contexto de una nueva ronda multilateral, buscando acumular concesiones a negociar entonces. Se esperaba para enero del 2001 una compilación de todas las demandas relacionadas con aplicación de acuerdos.

Mecanismo de Solución de Diferencias / Continuación de la página 8

El desafío de Brasil echa luz sobre las preocupaciones relacionadas con la competitividad y los esquemas de acceso preferencial a mercados, como el Acuerdo de Asociación Económica de la UE con sus ex - colonias de Africa, el Caribe y el Pacífico (países ACP), cuya autorización en los términos del Art. I del GATT está estancada en el Consejo del Comercio de Bienes de la OMC, sujeta a una clarificación de las condiciones de acceso a mercado para el banano del ACP. La reciente propuesta de la Comisión Europea de conceder acceso libre de aranceles a 'todo excepto armas' de todos los países menos desarrollados podría producir consecuencias similares a las planteadas por Brasil en el caso del café soluble.

EE.UU. vs. Brasil sobre patentes

EE.UU. estaría próximo a solicitar el establecimiento de un panel para que decida si ciertas disposiciones de la ley de protección de patentes de Brasil se ajustan al Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). La cuestión gira en torno al Artículo 68 de la ley de propiedad industrial de 1996 de Brasil, según el cual el dueño de una patente en Brasil debe asegurar que el objeto de la patente sea 'trabajado' en Brasil, ya sea produciendo el bien patentado en el país o permitiendo que el proceso patentado se utilice en Brasil. Si este requerimiento no se cumple, el gobierno puede emitir licencias obligatorias permitiendo a otros utilizar la patente contra la voluntad del dueño.

EE.UU. sostiene que el Artículo 68 es discriminatorio y por lo tanto contrario a las disposiciones del ADPIC 27.1 y 28.1.

EE.UU. no impondrá sanciones a Japón por ballenas

En un informe presentado al Congreso el 29 de diciembre, el ex -Presidente Clinton anunció formalmente que EE.UU. no impondrá sanciones comerciales contra Japón por la reanudación de la cacería de ballenas.

No obstante, Clinton instruyó a las agencias federales que mantengan la opción de las sanciones al monitorear las actividades balleneras de Japón. En agosto de 2000, EE.UU. amenazó con imponer sanciones contra Japón luego de la decisión de este país de expandir la cacería de ballenas con fines investigativos para incluir las Bryde y Sperm. Grupos de agricultores y empresarios habían expresado reiteradamente su preocupación de que imponer sanciones comerciales contra Japón podría dañar las exportaciones agrícolas de EE.UU. a ese país, el principal mercado para los productos agrícolas norteamericanos.

Acuerdo en caso Pez Espada

Chile y la Unión Europea llegaron a un acuerdo en el conflicto sobre la pesca del pez espada, según lo anunció a finales de enero el subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile. "Se ha resuelto esta controversia de manera satisfactoria para ambas partes y como consecuencia se procederá a suspender los procedimientos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), por un lado, y ante el Tribunal del Mar por el otro", señaló el funcionario.

El acuerdo establece la autorización a cuatro barcos chilenos y a otros cuatro europeos para que puedan faenar, acompañados de un equipo de inspectores -cuya labor se extenderá hasta los puertos- que se encargarán de supervisar las capturas y analizar técnicas para la conservación del pez espada, una especie altamente migratoria. De otra parte, el acuerdo fija un límite máximo de capturas de 1.000 toneladas y revive una comisión técnica que se había instaurado hace tiempo pero que nunca llegó a funcionar.

En la reunión del 12 de diciembre del Órgano de Solución de Diferencias, la UE había presentado una segunda solicitud de panel con el fin de Resolver la disputa con Chile en torno a las restricciones sobre el tránsito de pez espada por su territorio. La UE había enviado una propuesta el 28 de noviembre a la que Chile reaccionó favorablemente el 4 de diciembre. Australia, Canadá, Ecuador, Noruega, Islandia, EE.UU. y la India habían solicitado y obtenido estatus de terceras partes en la disputa.

Paralelamente y en respuesta a una medida similar aplicada por los europeos, Chile se comprometió a reducir progresivamente la tasa impositiva que se les aplica a los licores provenientes de la Unión Europea.

Acuerdo sobre contaminantes orgánicos persistentes

Del 4 al 9 de diciembre del 2000 se realizó en Johannesburgo, Sudáfrica, el V y último período de sesiones del Comité Intergubernamental de Negociación (CIN-5) de un Instrumento Jurídicamente Vinculante para la Aplicación de Medidas Internacionales sobre ciertos Contaminantes Orgánicos Persistentes. Recuérdese que en 1997 el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), había adoptado una decisión para proteger la salud humana y el medio ambiente a través de medidas internacionales que llevarán a la reducción o eliminación de la descarga de contaminantes orgánicos persistentes (COP) -sustancias químicas altamente tóxicas que permanecen en el ambiente y se bioacumulan en la cadena alimenticia (Ver *Puentes* Vol. 2 Nos. 2 y 4)-.

La reunión en Johannesburgo fue un éxito debido a la aprobación, por consenso, del texto del convenio que incluye medidas de control sobre la producción, importación, exportación, uso y desecho de contaminantes orgánicos persistentes. En principio las medidas se aplicarán a 12 químicos, la mayoría de los cuales serán inmediatamente prohibidos, y un comité de revisión se encargará de considerar nuevas sustancias según lo requieran las evidencias científicas.

Mediante este Convenio los gobiernos se comprometen a promover las mejores tecnologías disponibles para la sustitución de los COP existentes y a evitar la elaboración de nuevos químicos orgánicos. Así mismo tendrán que desarrollar marcos jurídicos y planes de acción nacionales para cumplir con los compromisos establecidos. Aún queda por definir un mecanismo financiero para asistir a los países en desarrollo y con economías en transición en la aplicación del acuerdo.

Uno de los químicos de la lista de los 12¹ que no será prohibido inmediatamente es el DDT, dado que varios países que lo utilizan para el control de los mosquitos de la malaria argumentaron razones de salud. Su uso, por lo tanto, se permitirá hasta que se logren desarrollar alternativas químicas y no químicas que sean económica y ambientalmente viables. El PVC, químico que ya no se produce, también se encuentra entre los no prohibidos inmediatamente, dado que muchos transformadores eléctricos y otro tipo de equipos que están en circulación lo contienen. Los Gobiernos deberán prevenir la fuga de químicos en estos equipos y reemplazarlos por otros materiales libres de PVC hasta el 2025.

E lanzamiento formal de este Convenio tendrá lugar en la Conferencia Diplomática que se realizará el 22 y 23 de mayo próximos en Estocolmo, Suecia, y entrará en vigor una vez que 50 países lo ratifiquen.

Para mayor información, contactar a: UNEPChemicals (IRPTC), tel: (41-22) 917-8193, fax: 797-3460, e-mail: pops@unep.ch, web: <http://irptc.unep.ch/pops>

¹ Dentro de los 12 químicos iniciales se encuentran: ocho pesticidas, dos químicos industriales y dos compuestos derivados indeseados.

Convención Marco sobre Cambio Climático

Del 13 al 25 de noviembre del 2000, La Haya, Holanda, fue el escenario de la VI Reunión de las Partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático (CoP6), cuyo objetivo era establecer la reglamentación del Protocolo de Kioto. Las discusiones giraron en torno a temas como la aplicación de los mecanismos de flexibilidad, la vulnerabilidad frente al cambio climático, la transferencia de tecnología y los mecanismos de cumplimiento, entre otros. A pesar de los distintos métodos utilizados para llegar a un acuerdo entre las Partes, este no fue posible, aunque en algunos casos se logró reducir el contenido de los documentos de negociación.

Sin embargo, este acercamiento probó ser aún muy lento, y a mediados de la segunda semana, el Presidente de la CoP6 tomó las riendas de las negociaciones y elaboró un documento en el cual se reflejaban los puntos en los cuales consideraba que los países Parte habían llegado a un acuerdo o estaban cerca de obtenerlo. Este texto es conocido como el Texto del Presidente y es un procedimiento anormal dentro del sistema de discusiones de la ONU.

Si bien el Texto del Presidente intenta conciliar las posiciones de las Partes, resultó un poco tardía. Efectivamente, una vez que apareció el documento, las Partes se vieron forzadas a negociar sobre los puntos más conflictivos. Vale la pena rescatar que el documento es un texto político, por lo tanto no puede considerarse como un reglamento sino que debe ser tomado como una guía a seguir para la redacción del reglamento del Protocolo.

Proyectos forestales por fuera del MDL. Para los países en vías de desarrollo o no-Anexo I, las negociaciones más duras fueron aquellas en torno al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) ya que este es el único mecanismo de flexibilidad que permitiría la realización de proyectos en países sin compromisos. En este caso, el objetivo principal fue elaborar las normas respectivas para establecer la estructura institucional requerida, definir los tipos de proyectos permitidos, así como los sistemas de control y poder de participación de los distintos actores necesarios para poner en funcionamiento el MDL. Sin embargo, fue poco lo que se pudo avanzar en estos puntos.

A este respecto, el Texto del Presidente señala algunas implicaciones relevantes para la aplicación del MDL, que servirán de guía para futuras negociaciones. Entre ellas se destacan:

- El reconocimiento de la soberanía del país no-Anexo I para determinar si el proyecto MDL es compatible con su criterio de desarrollo sostenible.
- La exclusión de los proyectos de energía nuclear como proyectos MDL. Se daría prioridad de aprobación a los proyectos de energía renovable (incluidos los pequeños proyectos hidroeléctricos) y de mejoramiento de la eficiencia energética.

La discusión más candente en torno al MDL, y la cual ha dominado el escenario de negociación, es la posibilidad de incluir proyectos forestales en este mecanismo. En lo que res-

Continúa en la página 14

Continuación de la página 13

pecta a estos proyectos, el Texto del Presidente toma por sentado algunos elementos relevantes, como los siguientes:

- La definición de bosque es la contemplada por la FAO, y no se toma en cuenta el elemento de la biodiversidad para dicha definición (a pesar de la solicitud expresa de la CoP de la Convención de Diversidad Biológica para que éste elemento fuese incluido).
- Se incluirían sólo los proyectos de aforestación y reforestación bajo el MDL.
- Los proyectos de reducción de emisiones por evitar deforestación (conocidos como proyectos de conservación) no estarían incluidos en el MDL, y se les manda a competir por financiamiento ante el Fondo de Adaptación establecido por la Convención.

Cada bloque por su lado. Fue en estos puntos y en otros similares en los cuales se entraron las discusiones. Por un lado, quedaron en evidencia las férreas posiciones de las Partes y por otro el desequilibrio de poder entre los distintos países representados en la CoP, ya que las negociaciones se dieron en dos planos. El primero abarca a los países industrializados. En este escenario, la Unión Europea intentaba limitar el rango de acción de países como los Estados Unidos, Japón y Australia, quienes desean poder utilizar al máximo los proyectos de los artículos 3.3 (proyectos forestales) y 3.4 (actividades adicionales -ganadería y agricultura-) del Protocolo tanto dentro como fuera de sus fronteras.

El segundo escenario se dio en el contexto del G-77 -el cual agrupa a los países en vías de desarrollo- y China. En este grupo la discusión se centró en si los proyectos forestales deberían ser permitidos en el MDL, y de serlo, si deberían incluirse los proyectos de conservación. En la madrugada del sábado 25, día en que se cerraba la reunión- aún no se había llegado a un acuerdo en ninguno de los dos escenarios, razón por la cual la CoP6 tuvo que ser suspendida.

Mayo: acuerdo impostergradable. En estos momentos, todos los esfuerzos se concentran en la reanudación de la CoP6 que se llevará a cabo en Bonn, Alemania, en mayo próximo. Los países Parte se encuentran discutiendo sus posiciones en distintos espacios, en aras de acelerar el proceso de concertación. Los pronósticos para esta próxima reunión no son halagadores. Sin embargo, las Partes están forzadas a llegar a un acuerdo en mayo; de lo contrario, se pondría en peligro todo el proceso generado en torno al Protocolo de Kioto y en especial en lo referente a la Convención sobre Cambio Climático.

Preparado por Ana Victoria Rojas, miembro del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), Costa Rica. Para mayor información sobre este tema, visitar la página web del Convenio Marco sobre Cambio Climático: www.unfccc.de

Reunión del Comité sobre Bioseguridad

El I Período de sesiones del Comité Intergubernamental para el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad (ICCP-1), se

realizó del 11 al 15 de diciembre en Montpellier, Francia, para discutir sobre asuntos relacionados al intercambio de información; la capacitación; la toma de decisiones; el manejo, transporte, empaquetado e identificación; y el cumplimiento del Protocolo. Varios delegados elogiaron el "espíritu de Montpellier" que se sintió durante las reuniones y que ayudará a construir confianza e impulso político en el proceso. Sin embargo, también se resaltaron grandes obstáculos como la capacidad de los países en desarrollo para aplicar las provisiones del Protocolo.

Capacitación, manejo y transporte. sobre capacitación (Art. 22, 28) algunos delegados señalaron los diferentes niveles de capacidades en los países en desarrollo y llamaron a realizar un trabajo inter-sesional para evaluar las necesidades nacionales. Se mencionaron algunas de las prioridades sobre capacitación, desde asuntos relacionados a recursos humanos hasta capacidades jurídicas, regulatorias e institucionales. Los delegados pidieron al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que aceleraran la aplicación de la estrategia de capacitación que apunta a los países con necesidades de capacitación básicas. También solicitaron al PNUMA y a la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) que convocaran a una reunión de expertos para desarrollar propuestas sobre capacitación, en preparación al II Período de sesiones del ICCP (ICCP-2), e invitaron a los países a presentar sus necesidades e iniciativas de capacitación para ser recopiladas con miras al ICCP-2.

Los delegados también tocaron temas relacionados al manejo, el movimiento, el empaquetado y la identificación de organismos vivos modificados (OVM; Art. 18). Las conversaciones sobre estos temas transcurrieron sin contratiempos. En las decisiones sobre acciones inter-sesionales, los delegados invitaron a los gobiernos y a las organizaciones internacionales relevantes a presentar a la Secretaría del CDB información sobre prácticas existentes, reglas y estándares relevantes al Art. 18 hasta marzo del 2001 para que sean sintetizados para el ICCP-2. En este contexto, los delegados también enfatizaron la necesidad de avanzar de una simple evasión de conflictos con la OMC, a coordinar activamente a través de órganos que establezcan estándares.

Mecanismo de cumplimiento. Sobre el tema de cumplimiento (Art. 34), las negociaciones se enfocaron principalmente en la naturaleza del mecanismo del mismo; el procedimiento de puesta en marcha; los mecanismos institucionales y el papel de la Reunión de las Partes; y las consecuencias del cumplimiento. Varios delegados coincidieron en que el mecanismo de cumplimiento del Protocolo debería ser: no-confrontacional, no-judicial, facilitativo, transparente, equitativo, confiable y oportuno. Mientras que las ONG hicieron un llamado al uso de sanciones fuertes, la mayoría de los países favoreció el uso de incentivos y medidas facilitadoras para el cumplimiento, con un particular énfasis en las necesidades especiales de los países en desarrollo. Los delegados invita-

Continúa en la página 15

Continuación de la página 14

ron a los gobiernos a entregar sus consideraciones sobre este tema al Secretario Ejecutivo para sintetizarlas y ponerlas a consideración en una reunión de expertos abierta a realizarse inmediatamente antes de la ICCP-2.

Mecanismo de intercambio de información. Las discusiones se dieron en torno a la estructura del mecanismo de intercambio de información sobre bioseguridad y la aplicación de los detalles para su fase piloto (Art. 20). Hubo acuerdo general en relación a que la BCH debería incluir a todos los gobiernos; abarcar tanto el intercambio de información electrónica como no electrónica; y ser susceptible de una rápida evolución. Además, debería incorporar, con base en las prioridades: la información relevante para el uso de los puntos focales en el consentimiento informado previo, la legislación y la evaluación de riesgos a nivel nacional, y la incorporación de información para el Art. 11.1 (intercambio de información). Durante las negociaciones se resaltó con frecuencia el vínculo entre el intercambio de información y la capacitación. En su decisión sobre las acciones inter-sesionales, los delegados hicieron un llamado para que se iniciara la fase piloto tan pronto sea posible. Algunos observadores de la reunión expresaron su preocupación sobre la probabilidad de que estos mecanismos de aplicación continúen con lo que se ha visto hasta ahora como un patrón de fracaso en la aplicación del acuerdo madre, el CDB.

Los delegados también discutieron sobre las responsabilidades, el papel y los potenciales miembros de la lista de expertos, invitaron a la nominación de éstos y a la presentación de posiciones sobre el desarrollo de la lista. El debate sobre los mecanismos y procedimientos de toma de decisiones (Art. 10) resaltó el desacuerdo continuo sobre si los OVM son intrínsecamente peligrosos. Algunos argumentaron que el Protocolo de Bioseguridad debería aprender de las experiencias de los convenios de Basilea y Rotterdam que tratan sobre el movimiento de sustancias que son indudablemente peligrosas.

El Protocolo de Bioseguridad controla el movimiento, uso y manejo de los OVM que podrían tener un efecto adverso en la biodiversidad, tomando en cuenta los riesgos a la salud humana, enfocándose en el movimiento transfronterizo de estos organismos. El Protocolo se adoptó como parte del CDB el 29 de enero del 2000. La segunda reunión del ICCP se realizará del 1 al 5 de octubre del 2001 en Montreal, Canadá. En esta reunión se discutirá sobre responsabilidad y compensación; control y rendimiento de cuentas; la Secretaría; guías para el mecanismo financiero; reglas de procedimiento para la Reunión de las Partes; asuntos sobre aplicación; una agenda de trabajo provisional para la Reunión de las Partes; y otros asuntos del ICCP-1 para su continua consideración.

Para mayor información, visite la página web de la Secretaría del CDB: www.biodiv.org/biosafe/protocol/

PUENTES

Entre el Comercio y el Desarrollo Sostenible

BRIDGES/PUENTES/PASSERELLES/BRÜCKEN

buscan proveer información y análisis sobre la intersección entre el Comercio y el Desarrollo Sostenible para el creciente número de actores de todo el mundo involucrados en el debate. El Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible (ICTSD) y sus organizaciones asociadas reconocen el auspicio del Gobierno Federal Suizo (BAWI) para la publicación de Bridges y el de la Fundación John D. and Catherine T. MacArthur para Puentes y Passerelles.



BRIDGES Between Trade and Sustainable Development es publicado mensualmente por el Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible.

Director: Ricardo Meléndez-Ortiz
Editora: Anja Halle
Dirección: 13 chemin des Anémones 1219 Ginebra, Suiza
Tel: (41-22) 917-8492
Fax: (41-22) 917-8093
E-mail: ictsd@ictsd.ch
Web: <http://www.ictsd.org>



PUENTES Entre el Comercio y el Desarrollo Sostenible, la versión para América Latina de *BRIDGES*, es publicada bimestralmente en colaboración con la Fundación Futuro Latinoamericano.

Coordinador: Nicolás J. Lucas
Editora: Manuela Botero Thiriez
Asesora editorial: María Amparo Albán
Asistentes editoriales: Oscar Haro y Marijke Hallo de Wolf
Dirección: Casilla 17-17-558 Quito, Ecuador
Telefax: (593-2) 920-635/920-636
E-mail: flla@fulano.org
Web: <http://www.fulano.org>



PASSERELLES entre le commerce et le développement durable es la versión en francés de *BRIDGES*, publicada bimestralmente en colaboración con ENDA-Tiers Monde.

Coordinador: Taoufik Ben Abdallah
Dirección: B.P. 3370, Dakar, Senegal
Tel: (221) 821-7037
Fax: (221) 822-2695
E-mail: syspro2@enda.sn
Web: <http://www.enda.sn>



BRÜCKEN Zwischen Handel und Zukunftsfähiger Entwicklung la versión alemana de *BRIDGES*, es publicada bimestralmente en colaboración con Germanwatch en Bonn, Alemania.

Cordinador: Rainer Engels
Tel: (49-228) 60492-0
Fax: (49-228) 60492-19
E-mail: tradewatch@germanwatch.org
Web: <http://www.germanwatch.org>

Las opiniones expresadas en los artículos firmados en *BRIDGES/PUENTES/PASSERELLES/BRÜCKEN* son exclusivas de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del ICTSD y las publicaciones. El material de estas publicaciones puede ser utilizado en otras publicaciones con una completa cita de su fuente.

Bridges Weekly Trade News Digest

Para suscribirse al resumen semanal en inglés del ICTSD de noticias comerciales relevantes para los interesados en Medio Ambiente y Desarrollo, por favor enviar un mensaje a: Majordomo@igc.apc.org. Dejar "subject" en blanco y en el cuerpo del mensaje escribir: subscribe tradedev. Para copias vía fax y correo, también contactar al ICTSD. También disponible en el sitio electrónico del ICTSD.

Todas las reuniones de la Organización Mundial del Comercio se celebran en Ginebra. Las fechas están sujetas a cambios; rogamos ponerse en contacto con la OMC para confirmarlas. Todos los números de teléfono y fax empiezan con (41-22) 739. Los números indicados en la lista que está a continuación corresponden únicamente a las extensiones. Dirección en internet: www.wto.org

EVENTOS

Febrero 14-15	Consejo de Comercio de Servicios de la OMC. Contacto: Nuch Nazeer, tel: 5393, fax: 5458
Febrero 14-18	Reunión del Comité Interino de Evaluación de Químicos del Convenio de Rotterdam, Ginebra. Contacto: Jim Willis, UNEP Chemicals, tel: (41-22) 917-8111, e-mail: chemicals@unep.ch
Febrero 16	Comité de Comercio y Desarrollo de la OMC. Contacto: Chiedu Osakwe, tel: 5250, fax: 5774
Febrero 22-23	Comité de Acuerdos Regionales de la OMC. Contacto: Jorge Vigano, tel: 5078, fax: 5774
Febrero 22-24	Diálogo sobre Comercio, Propiedad Intelectual y Recursos Biológicos y Genéticos en América Latina. ICTSD, Cuzco, Perú. Contacto: Manuel Ruiz, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, tel: (511) 422-2720 / 441-9171, fax: (511) 442-4365, e-mail: manoloruiz@terra.com.pe
Febrero 27	"Las dimensiones sociales y ambientales de la integración en el Cono Sur". Organizado por el Centro de la Cumbre de las Américas, el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) y el Centro de Investigación y Estudios sobre el Trabajo de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), Miami, EE.UU. Contacto: Bruce Jay, e-mail: BruceJay@compuserve.com
Marzo 6	Organo de Solución de Diferencias de la OMC. Contacto: Paulo Barthel-Rosa, tel: 5095, fax: 5761
Marzo 8-9	"Trade and Environment: Bridging Gaps and Moving Forward". Global Environmental and Trade Study/World Trade Institute, Ginebra. Contacto: Mónica Araya (GETS); tel: (1-203) 432-5216; email: Monica.Araya@yale.edu , página web: http://www.gets.org/Geneva2001.htm .
Marzo 9	Comité de Normas de Origen de la OMC. Contacto: Eki Kim, tel: 5584, fax: 5770
Marzo 12-13	Organo de Supervisión de los Textiles de la OMC Contacto: J.-P. Lapalme, tel: 5223, fax: 5765
Marzo 14	Comité de Contratación Pública. Contacto: Vesile Kulaçoglu, tel: 5187, fax: 5790
Marzo 14-15	Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. Contacto: Gretchen Stanton, tel: 5086, fax: 5760
Marzo 16	Comité de Normas de Origen de la OMC. Contacto: Eki Kim, tel: 5584, fax: 5770
Marzo 19-30	Tercera sesión del comité preparatorio para la conferencia de las Naciones Unidas sobre "tráfico ilegal de armas pequeñas y livianas en todos sus aspectos", Nueva York. Contacto: Departamento de Desarme de la ONU, NY. E-mail: mcnab.un.org .
Marzo 26-27	Consejo del Comercio en Servicios de la OMC

Contacto: Nuch Nazeer, tel: 5393, fax: 5458

Marzo 27-28 Comité de Agricultura de la OMC.
Contacto: Peter Ungphakom, tel: 5412, fax: 5458

Marzo 30 Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio.
Contacto: Hans-Peter Werner, tel: 5286, fax: 5458

PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS

Centro de Investigación y Planificación de Medio Ambiente y World Resources Institute. 2000. "Through the Open Door: Realising the Full Potential of Trade Liberalisation". Un estudio sobre los costos ambientales de tres productos líderes de la exportación. CIPMA y WRI. Lima/Washington.

FAO. 2000. "State of Food and Agriculture 2000-FAO Annual Report". FAO, Roma. Documento disponible en: <http://www.fao.org/docrep/x4400e/x4400e00.htm>.

FAO. 2000. Informe de la Consulta Técnica sobre la pesca ilegal, no informada y no regulada. Documento en inglés. Serie de informes de la FAO sobre pesquerías, Roma.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. 2000. "Dealing with Climate Change: National Policies and Measures". International Energy Agency.

OXFAM. 2000. "Regulating International Business: Beyond Liberalisation". Oxfam, Dorset.

LODGSON, Jeanne y HUSTED, Bryan. 2000. "Mexico's environmental performance under NAFTA: the first five years," artículo en el *Journal of Environment & Development* 9 (4, 2000).

MASKUS, Keith. 2000. "Regulatory Standards in the WTO: Comparing Intellectual Property Rights with Competition Policy, Environmental Protection, and Core Labor Standards". Informe disponible en: http://www.wtwatch.org/library/admin/uploadedfiles-/Regulatory_Standards_in_the_WTO_Comparing_I_2.htm.

MATTOO, Aaditya y OLARREAGA, Marcelo. 2000. "Should Credit be Given for Autonomous Liberalisation in Multilateral Trade Negotiations?". Documento de trabajo No. 2374, Banco Mundial, Washington, DC. Documento disponible en: <http://www.worldbank.org/research/trade/majoract.html#seven>.

UNCTAD. 2000. "Least-developed Countries 2000 Report". Naciones Unidas. Ginebra.

UNCTAD. 2000. "Trade Agreements, Petroleum and Energy Policies". Naciones Unidas. Nueva York/Ginebra.

RECURSOS EN INTERNET

Nueva sección sobre comercio y medio ambiente en la página de internet de la OMC.
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/envir_s/envir_s.htm

Business and Social Initiatives Database (BASI). La Organización Mundial del Trabajo lanzó esta base de datos con información sobre iniciativas sociales de empresas y otros grupos interesados sobre asuntos de trabajo y empleo. BASI está disponible en internet: <http://oracle02.ilo.org/vpi/welcome>.

